



VIOLENCIA - 2

Luis Pedro España N.

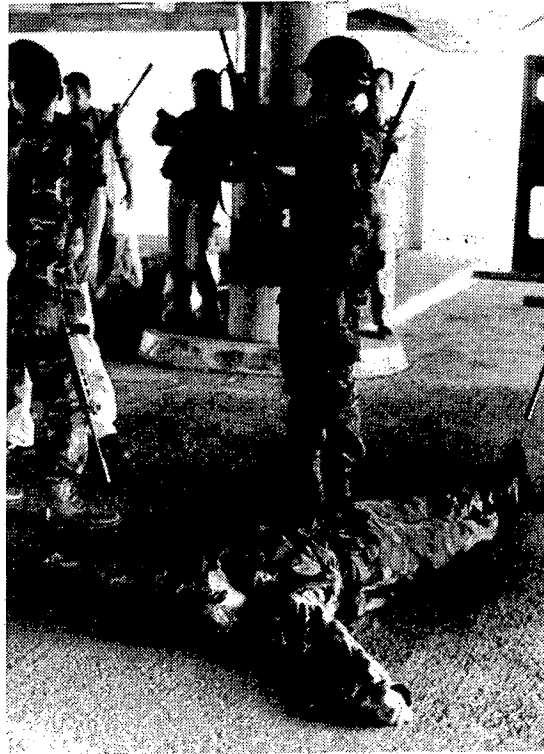
En Venezuela

La explosión de la violencia

Desde hace dos años aproximadamente se está desarrollando en varios países latinoamericanos un estudio interdisciplinario sobre la violencia social («Violencia en la Región Andina»). El mismo ha sido coordinado por la Asociación Peruana de Estudios para la Paz y patrocinado por el Ministerio de Cooperación del Gobierno de Holanda. Cada país de la región ha elaborado el estudio de su caso particular y desde allí se ha hecho un diagnóstico global. Luis Pedro España nos presenta en tres secciones las conclusiones sobre la investigación que al respecto se realizó en Venezuela. (N. de la R.)

El aumento de la violencia abierta en Venezuela se constata a partir de una serie de eventos que conmocionaron a todo el país. El primero de ellos fue protagonizado por los habitantes de las principales ciudades del país, quienes se lanzaron a las calles a fin de obtener por sus propios medios los bienes a los que no tenían acceso, desencadenándose una semana de revueltas y desórdenes sociales que culminaron con la muerte de más de 300 personas y la militarización del país.

Ello quedó registrado como los sucesos del 27 de febrero de 1989 o «Caracazo», al cual se le sumaría una nueva crisis de febrero tres años después. En la madrugada del 4 de febrero de 1992, parte de los efectivos del Fuerte Tiuna ubicado en Caracas y perteneciente al ejército venezolano, comandado por un grupo de oficiales de mediana graduación, trataron sin éxito de tomar por asalto el palacio presidencial de Miraflores con el fin de derrocar al Presidente Carlos A. Pérez, acción ésta que estuvo acompañada por la rebelión de varios cuarteles en el interior de la República, los cuales capitularon una vez frustrado el intento



en Caracas.

Posteriormente a este hecho, en el país se han activado un conjunto de grupos políticos civiles y militares que estimulados por la acción golpista han reinvestigado el uso de la violencia política como estrategia de poder, desconociendo y enfrentándose a la institucionalidad democrática de los últimos 30 años.

El crecimiento de la violencia política en el país ha llegado a la aparición de prácticas terroristas y la aparición de supuestas listas de ajusticiables, lo

cual da indicios del inicio de una guerra sucia cuya magnitud, repercusiones y responsabilidad, es imposible de precisar.

El hecho más reciente de violencia política se registró el 27 de noviembre de 1992, cuando un nuevo grupo de militares trataron de derrocar al gobierno, sobre la base de la intención «salvadora» de eliminar la corrupción pública y convocar a un gobierno de notables o de honestos venezolanos.

Si bien la violencia política ha sido un cambio sustantivo para la dinámica venezolana de los últimos cuatro años, ella es sólo la parte visible de un témpano de violencia que cruza a la sociedad en su conjunto. La violencia cotidiana, la ampliación de formas de violencia que van desde el aumento de la delincuencia y la inseguridad, hasta la pérdida progresiva de todas las normas que regulan a la violencia privada, sitúan a la sociedad venezolana en el umbral de nuevas y más profundas formas de violencia.

La proliferación del uso de la violencia directa o indirecta en la cotidianidad y en las relaciones primarias de los ciudadanos es la puerta de entrada a la utilización de la violencia como instrumento o medio para alcanzar objetivos sociales mayores. La pérdida cultural y social del «rubor» por la violencia en escenarios microsociales permite que ésta se legitime, justifique y organice, en modos más complejos y acabados, tales como las mafias delincuenciales ligadas o no al narcotráfico, criminalización de la institucionalidad, aparición de grupos paramilitares, grupos de exterminio, lucha armada, inestabilidad política, represión estatal, etc.

Estas son formas de violencia que Venezuela puede que apenas comience a reconocer. De este modo, si continúan las condiciones que pueden formularse como causas de ella, podría estar configurando una realidad

dé violencia abierta en el país sólo comparable a la vivida durante el primer siglo de nuestra historia republicana.

Este escenario límite de desarrollo de la violencia en Venezuela tiene sus atenuantes. Probablemente la imagen de caos, que fácilmente podemos extrapolar a partir de la evidencias de los últimos cuatro años, tiene cotos más próximos. Las intervenciones militares (golpes de estado, tutelaje militar, etc.), como pautas moderadoras de gobiernos cuyos Estados disponen de fuentes de poder aún no agotadas (como es el caso venezolano), sería el escenario previo a una situación en la cual la institucionalidad democrática no es capaz de detener las tendencias del escenario límite posible, es decir, el caos, o guerra civil, como algunos han pronosticado para el país.

La explosión de violencia en Venezuela, entonces, nos acerca antes que al caos a la intervención militar, al uso de la violencia directa desde el Estado para restablecer el orden sin los límites y controles institucionales de la democracia. Ello representaría un aumento de la violencia institucional con el fin de regular la violencia estructural que está aflorando, producto de los cambios que han ocurrido en el país.

Afirmar que el desenlace posible de la tendencia al aumento de la violencia en Venezuela pasa por la intervención militar no quiere decir que inevitablemente el sistema democrático venezolano tenga sus días contados. Ello es una simple probabilidad, que quizás cada vez cobre más fuerza, pero que sólo en el análisis de las causas que han conducido a este aumento de la violencia podrán encontrarse las bases para hipotetizar sobre su futuro.

¿Cuáles fueron los cambios ocurridos?

El aumento de la violencia abierta en Venezuela puede explicarse a partir de dos cambios globales experimentados por la sociedad venezolana durante la década de los

setenta y ochenta.

El primero de ellos fue el cambio que significó pasar en el corto plazo de la bonanza a la depresión económica, con la secuela de deterioro en los niveles de vida de la población, y, en segundo lugar, la pérdida, incapacidad o involución de las instituciones políticas para procesar los conflictos en aumento a través de vías pacíficas.

Estos dos procesos están conectados de un modo particular para el caso venezolano dadas ciertas particularidades de la economía y del sistema político del país, las cuales tienen que ver con el carácter petrolero del Estado.

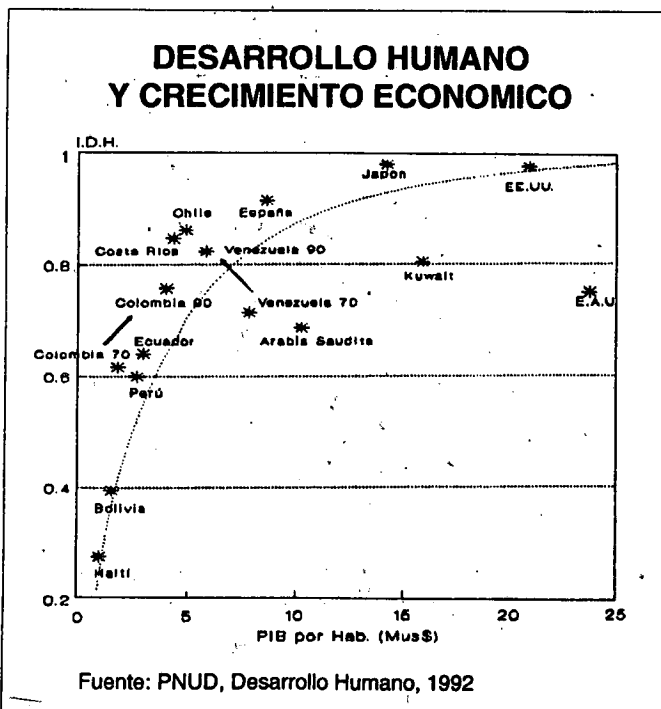
La democracia venezolana nació a partir de un acuerdo entre los grupos económicos y políticos más importantes del país, en el momento en que la última dictadura (1948-1958) perdió las bases de sustentación que le habían mantenido por diez años en el poder. El acuerdo de transición logrado suponía la incorporación de lo que para entonces eran los principales intereses de la comunidad nacional. De esa gran inclusión o agregación de intereses, a los que aspiraba dar cabida el nuevo régimen, sólo se excluyó a los grupos más radicales, fueran ellos de izquierda (encarnados por el Partido Comunista de Venezuela) o de derecha, para entonces representados en fórmulas de gobierno no democrático.

La base del acuerdo estuvo constituida por dos principios o premisas cuyo cumplimiento le correspondería al Estado, quien a partir de ese momento estaba ocupado por fuerzas democráticas organizadas en partidos políticos. Esas premisas eran, en primer lugar, la garantía de desarrollo económico y social expresado a través de la idea de modernización, y la segunda, el Estado avalaba el acceso proporcional del desarrollo a todos los sectores sociales que se acogieran y respaldaran al nuevo sistema.

La unión de ambos compromisos, teniendo por garante al Estado, permitía que la regla de relación entre los distintos grupos sociales, que aceptaban el nuevo régimen, fuera de cooperación y de lealtad entre ellos. Así, partidos políticos, élites económicas, fuerzas armadas, sector laboral, iglesia, y otros grupos de interés que se fueron agregando (asociaciones de vecinos, gremios, partidos de izquierda pacificados, etc.), crearon el consenso en favor del nuevo régimen, siempre y cuando las premisas iniciales se mantuvieran garantizadas por parte del Estado.

Como se entenderá, sólo un tipo muy especial de Estado podía garantizar las dos premisas señaladas. En otras palabras sólo un Estado populista podía sostener un proyecto político a través del desarrollo de la acumulación de capital y simultáneamente distribuir en magnitud similar a como se multiplicaran las demandas sobre el sistema.

Varios han sido los gobiernos latinoamericanos que han tratado de fraguarse apoyos y estabilidad a través de este método. Tanto democracias como dictaduras han intentado «financiarse» apegos políticos o disminuir la disidencia por medio de la asignación de recursos estatales. Buena parte de esas estrategias populistas han terminado por desencadenar procesos económicos indeseados (inflación, devaluaciones, recesión y desempleo) cuya última expresión fue el crecimiento de la deuda externa de



los países latinoamericanos propiciando los ajustes y las crisis de los años ochenta.

Para el caso venezolano la «eficiencia» del populismo de Estado tiene su origen en la disponibilidad de fondos desde los cuales financiar la estabilidad política democrática. El ingreso petrolero, de donde proviene en promedio más del 80% de las divisas del país y cerca del 70% de los ingresos del Estado, le permitió a éste cumplir por varias décadas con las bases de sustentación o las premisas constitutivas a partir de las cuales los distintos actores políticos le eran leales al sistema democrático.

El ingreso proveniente del cobro de impuesto a las empresas petroleras (fueran ellas extranjeras o nacionales) le dio al Estado una autonomía y discrecionalidad sobre el resto de los actores políticos y agentes económicos, permitiéndole al sector público ser un distribuidor de ingresos y asignar con un grado de libertad apreciable sus recursos en favor de la consecución de las premisas sustentadoras, es decir, acumular y distribuir a la vez.

Esto hizo que el tipo de institucionalidad que creó el sistema democrático estuviese atado a los importantes márgenes de maniobra que le permitía al sistema político disponer de un Estado opulento y con recursos suficientes como para atender las demandas que se formulaban. Con la garantía del ingreso petrolero para resolver los conflictos, el sistema no desarrolló la capacidad de sus instituciones (partidos políticos, burocracias gubernamentales, formas de representación, legislación, etc.) para manejar, por vías pacíficas, el problema básico de todo régimen político: la escasez de recursos en relación al número de demandas que se formulan, las cuales tienden a exponenciarse cuando el régimen es abierto, creando lo que se ha llamado el principio de la ingobernabilidad de la democracia.

Algunos ejemplos nos permitirán describir ese no desarrollo de las instituciones democráticas debido, entre otras causas, a que el ingreso petrolero depositado en el Estado otorgaba márgenes de maniobra suficientes como para mantener un grado de democratización bajo.

La elección directa de los ejecutivos locales (gobernadores y alcaldes), si bien estaba consagrada en la Constitución de 1961, no cristalizó, dada una disposición transitoria que establecía el nombramiento de estas autoridades por parte del Presidente de la República. Esta regla «temporal» sólo fue suspendida 29 años después.

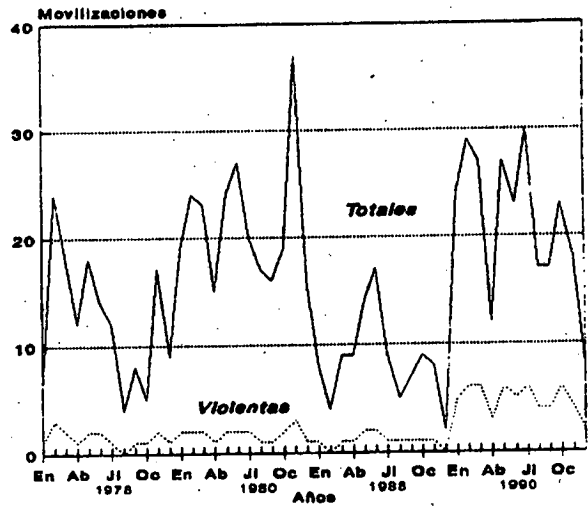
De igual forma el sistema electoral venezolano ha sido, durante los años que lleva el régimen, sumamente simple y restringido en cuanto a participación popular. Hasta hace muy poco en el país todos los órganos de representación (a excepción de los municipios con las reformas de 1978 y 1988) se escogían de una vez y por listas cerradas identificadas por colores según los partidos.

La democracia venezolana durante todos estos años limitó a unos pocos instrumentos y canales de participación el nivel de institucionalidad a partir del cual se procesaba el conflicto social. Estos canales eran las libertades y derechos ciudadanos básicos, y una consulta popular global cada cinco años. Con este escaso grado de democratización, el mismo con el que se partió en 1958, el sistema político logró procesar, regular y atender las de-

mandas, y con ello, garantizar niveles de paz social que perduraron, al menos, por el lapso de una generación completa.

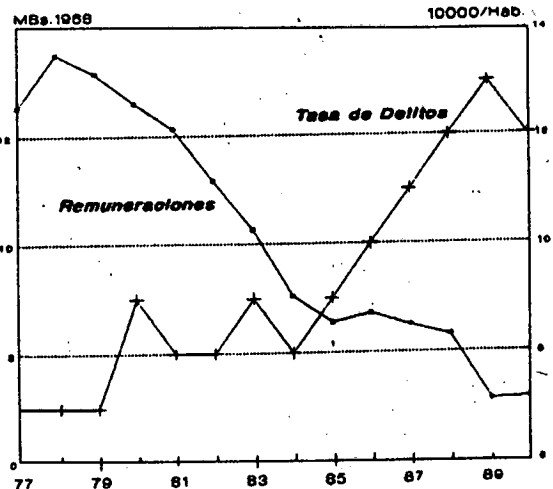
Según lo anterior no hay duda de que la característica petrolera de nuestro Estado permitió que el poco desarrollo institucional descrito no se viese desbordado por el aumento de la complejidad social. No obstante, esto tenía un límite. Si las condiciones de estabilidad y paz (basadas en el uso político de los recursos petroleros) cambiaban, la viabilidad futura del sistema podía entrar en crisis.

MOVILIZACIONES SOCIALES Y VIOLENCIA EN VENEZUELA 1976-90



Fuente: Base de Datos de Conflictos IIES-UCAB

DELITOS Y REMUNERACION AL TRABAJO Venezuela 1977-1990



Fuente: OCEI Anuario de Cuentas Nacionales BCV, Informes Económicos

Aun antes de desatada la crisis de los ochenta era clara la dependencia existente entre los ingresos petroleros y el modo como se resolvían los conflictos sociales en el país. Sin embargo, la explosión de las tensiones parecía que sólo vendría una vez que el petróleo dejara de abultar las arcas estatales y no, como de hecho ocurrió, cuando la multiplicidad de demandas hiciera insuficientes a los recursos petroleros, cualquiera fuera la magnitud de éstos. Así, la democracia de bajo nivel de institucionalidad tenía sus días de paz social contados conforme sólo dependiera del petróleo como atenuador de conflictos.

No obstante esa realidad, las distintas fuerzas sociales del país, que aparentaban estar conscientes de la provisionalidad de la «paz reinante», no lograron proponer modelos viables de sociedad que hicieran posible la transición prevista.

En consecuencia, el cambio sustantivo ocurrido en Venezuela se refiere a una transformación brusca del país, en el orden socio-económico, el cual no contó con recursos y procedimientos políticos desde los cuales hacerle frente al cúmulo de conflictos que ella generó. No encontrándose a la disposición del sistema mecanismos (distintos al expediente petrolero) para la canalización pacífica de las diferencias, el desbordamiento de éstas y la aparición de la violencia social y política, fué el resultado evidente, aunque imposible de ser atendida por los distintos actores políticos en medio de la bonanza petrolera que antecedió a la crisis.

Situar en la reducción relativa del ingreso petrolero la causa de la violencia en Venezuela, sería una explicación incompleta. El desarrollo y aumento de la violencia, es consecuencia además del no crecimiento institucional de las instancias democráticas especializadas en la resolución pacífica de los conflictos. El país se ha visto obligado a desarrollar modos (no petroleros) para la resolución de los conflictos sociales, y los hechos señalan que no lo hemos logrado.

Así, puede concluirse que la variación socio-económica ocurrida en Venezuela es una condición más, que ayuda a explicar el aumento o la disminución de la violencia, pero en modo alguno es suficiente para descifrar las variaciones en el grado de violencia.

Hemos dicho que entre las décadas del setenta y noventa la violencia en Venezuela se ha incrementado. Además de los momentos críticos de violencia que reseñamos al principio (Febrero de 1989 y 1992), dos indicadores más pueden servirnos de prueba.

En primer lugar, precisamente a partir de la combinación entre cambios socioeconómicos y escaso desarrollo institucional, en los últimos años el uso de la violencia en

las protestas civiles se ha incrementado notablemente.

Si bien, como puede apreciarse en el gráfico, el número de protestas o movilizaciones (huelgas, marchas, tomas, etc.) sigue una lógica cíclica dependiendo de la época del año, su tendencia a través de los años ha sido estable, aunque no así, el número de ellas que han sido violentas. Mientras en los años setenta y ochenta el uso de la violencia como forma de protesta en las movilizaciones sociales alcanzaba a poco menos del 10% de las totales, para 1990 éstas más que se duplicaron, representando en promedio hasta un 23% de las registradas.

El uso de los actores sociales y políticos de la violencia como forma de movilización, es un cambio importante que da cuenta del rezago del sistema político para resolver los problemas por las vías pacíficas. Este hecho debe interpretarse como la incapacidad reciente del sistema político de canalizar el conflicto una vez reducida la importancia del ingreso petrolero en su capacidad de atenuarlos.

Un segundo indicador utilizado se refiere al crecimiento de la delincuencia comparado con la variación del salario real promedio del venezolano.

Aquí evidenciamos que si bien ha habido un aumento de la violencia política, también es constatable un crecimiento en la violencia propiamente social.

En el gráfico se muestra el comportamiento inversamente proporcional entre tasa de delitos por mil habitantes y los niveles reales de la remuneración al trabajo medido en bolívares anuales. Mientras la primera aumenta en un 17,3% anual, la segunda cae en 3,6%.

La lógica relación entre estas dos variables comprueba que el deterioro socioeconómico ha ido apareado a un incremento de la violencia en la cotidianidad. Situación ésta que no parece se atenúe en el corto plazo.

En términos del nivel de repercusión que ambos tipos de violencia, la política y la social, tienen para la población, ésta última es la más sentida por los habitantes de las principales ciudades del país, al punto de ocupar (bajo el rubro de

inseguridad personal) el primer lugar en la lista de problemas nacionales que deben ser resueltos, según las encuestas de opinión que se han realizado.

El aumento de la violencia delictuencial en Venezuela, parece preocupar más que el desempleo, el costo de la vida, o incluso la corrupción administrativa. Aunque, cada vez que la violencia política irrumpe conmocionando al país, la preocupación por lo político y la estabilidad, pasa lógicamente a ocupar el primer punto en la agenda. Una vez pasado el hecho extracotidiano, la violencia de todos los días vuelve a ser lo característico de nuestra violencia.

